

Repercusiones costarricenses del golpe de Estado de 1973 en Chile

Por Iván MOLINA JIMÉNEZ*

EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE ESTE ARTÍCULO es analizar las repercusiones inmediatas que tuvo en Costa Rica el golpe de Estado que derrocó al presidente chileno, Salvador Allende, el 11 de octubre de 1973. La elección del caso costarricense se justifica por tres razones básicas: primero porque por esa época, junto con Uruguay y Chile, este pequeño país centroamericano se distinguía por la existencia de una larga tradición democrática, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX;¹ segundo porque algunos de sus políticos e intelectuales más influyentes se mostraban sumamente preocupados por el retroceso de la democracia en América Latina; y tercero porque los cambios económicos y sociales impulsados desde 1950, e intensificados después de 1970, parecían acercar la experiencia de Costa Rica a la de Chile.

Aparte de lo anterior, cabe resaltar dos aspectos adicionales. En primer término, cuando ocurrió el golpe de Estado la sociedad costarricense se encontraba en la etapa final de la campaña electoral que culminó en los comicios generales del 3 de febrero de 1974. De esta manera, lo sucedido en Chile pronto fue incorporado en los discursos y la propaganda dirigidos a los votantes por uno de los partidos contendientes. En segundo lugar, dado que en Costa Rica el ejército fue abolido después de la guerra civil de 1948,² los acontecimientos chilenos fueron motivo de reflexión y análisis en relación con la función que desempeñaban los militares en América Latina.

En razón de lo expuesto, el presente artículo se propone demostrar que la respuesta predominante de las agrupaciones políticas, los intelectuales y los medios de comunicación colectiva costarricense

* Catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica; e-mail: <ivan.molina@ucr.ac.cr>. El trabajo de base para este artículo se realizó en el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA) y fue financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica.

¹ John Peeler, "Early democratization in Latin America: Costa Rica in the context of Chile and Uruguay", ponencia presentada en el XIX Congreso de la Latin American Studies Association, Washington, D.C., 1995; Iván Molina, "Elecciones y democracia en Costa Rica (1885-1913)", *European Review of Latin American and Caribbean Studies* (Ámsterdam), núm. 70 (abril de 2001), pp. 41-57.

² Mercedes Muñoz, *El Estado y la abolición del ejército 1914-1949*, San José, Porvenir, 1990, pp. 148-163.

censes fue la condena o el rechazo al golpe de Estado ocurrido en Chile. A esta tendencia (cuya excepción fueron algunos políticos y empresarios de extrema derecha) se sumaron incluso dirigentes, organizaciones y empresas periodísticas que eran definidamente anticomunistas, no simpatizaban con el gobierno de la Unidad Popular y, desde esa época, se identificaban con un modelo de gestión pública —puesto en práctica en la década de 1980— que abogaba por reducir la intervención estatal en la economía y fomentar la expansión del sector privado.

Para cumplir con el objetivo planteado, el artículo ha sido dividido en cuatro secciones principales. En la primera, se sintetiza muy brevemente el desarrollo de Costa Rica en el periodo 1950-1973, con énfasis en los cambios ocurridos después de 1970 y en las características de la campaña electoral que finalizó en febrero de 1974; en la segunda, se analizan los editoriales de los principales periódicos del país con respecto al derrocamiento de Allende; en la tercera, se consideran los pronunciamientos del Poder Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa y de intelectuales y académicos; y en la cuarta se identifica la repercusión del golpe de Estado en la propaganda de los partidos políticos. Las principales fuentes consultadas fueron los periódicos costarricenses de las dos semanas posteriores al 11 de septiembre de 1973.

1. Costa Rica (1950-1973)

LUEGO del triunfo del grupo encabezado por José Figueres en la guerra civil de 1948, Costa Rica comenzó a experimentar una decisiva transformación institucional, que se intensificó en las décadas de 1950 y 1960. Este proceso, impulsado por el Partido Liberación Nacional (PLN) fundado por los figueristas en 1951, tuvo dos ejes fundamentales: la diversificación de la producción, mediante el apoyo a pequeños y medianos empresarios, y la expansión del Estado como promotor y regulador de las actividades económicas. La puesta en práctica de tal proyecto se benefició del nuevo auge que caracterizó a la economía capitalista mundial desde 1945. Fue en este contexto que el PLN, por primera vez en el poder a partir de 1953, inició amplias políticas redistributivas del ingreso nacional, con el fin de fomentar el desarrollo del mercado interno.³ Para

³ Jorge Rovira Mas, *Estado y política económica en Costa Rica: 1948-1970*, San José, Porvenir, 1982, pp. 39-87.

inicios del decenio de 1970, las políticas sociales del PLN, incorporado a la Internacional Socialista como observador desde 1966 y convertido en miembro pleno diez años después, habían favorecido la movilidad ascendente, la consolidación de nuevas capas medias vinculadas con la expansión del Estado y una mejora fundamental en las condiciones de vida de la población.⁴

Entre finales de la década de 1960 e inicios de la de 1970, el proyecto del PLN, que financió la diversificación económica con base en una banca nacionalizada desde 1948, comenzó a enfrentar tres graves desequilibrios. Primero, desde 1958 Estados Unidos había impulsado la integración centroamericana con el fin de que corporaciones de ese país pudieran instalar filiales en el istmo bajo condiciones extraordinariamente favorables en cuanto a exención de impuestos, repatriación de ganancias y otros estímulos similares. Pese a que Costa Rica inicialmente se resistió a formar parte de esta iniciativa, finalmente se integró, a raíz de lo cual la industria costarricense experimentó una penetración fulminante del capital extranjero, que supuso importaciones crecientes de equipo y materias primas industriales. El resultado final fue un déficit crónico en la balanza comercial, dado que entre 1966 y 1972 el valor de las importaciones industriales superó en 250 millones de dólares el de las exportaciones de dicho sector. Si a esto se agrega la repatriación de utilidades (logradas sobre todo mediante la colocación de los productos industriales en un mercado nacional sometido a fuertes regulaciones proteccionistas), se comprende mejor cómo esa industrialización supuso una transferencia creciente de valor de la economía costarricense al capital transnacional.⁵

Segundo, para compensar parcialmente los problemas provocados por la industrialización referida, un nuevo gobierno presidido por Figueres (1970-1974) fundó en 1972 la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA), con el fin de crear empresas que luego serían traspasadas al sector privado. Este experimento,

⁴ Víctor Hugo Céspedes y Ronulfo Jiménez, *Pobreza en Costa Rica: concepto, medición y evolución*, San José, Academia de Centroamérica, 1995, pp. 49-55; Carmelo Mesa-Lago, *Buscando un modelo económico en América Latina: ¿mercado, socialista o mixto? Chile, Cuba y Costa Rica*, Caracas, Nueva Sociedad, 2002, pp. 413-415 y 423-424; Marcos Álvarez, *Líderes políticos del siglo xx en América Latina*, Santiago de Chile, LOM, 2007, pp. 279-280.

⁵ Francisco Esquivel, *El desarrollo del capital en la industria de Costa Rica: 1950-1970*, Heredia, Editorial Universidad Nacional, 1985; Carlos Izurieta, "Empresas extranjeras, producción bajo licencia y formas oligopólicas en la industria manufacturera en Costa Rica", *Revista de Ciencias Sociales* (San José), núm. 24 (abril de 1982), pp. 33-46.

conocido como el Estado empresario, llevó a que CODESA patrocinara una serie de proyectos muy grandes, que concentraron una proporción creciente del crédito estatal y empezaron a producir elevadas pérdidas. Durante esta misma administración figuerista, el Estado profundizó sus políticas sociales al establecer el Instituto Mixto de Ayuda Social (1971), con lo cual el gasto público, por ese lado, también se incrementó.⁶

Por último, a inicios del decenio de 1970 era evidente que el contexto externo había variado de manera desfavorable para la economía costarricense, en razón de la caída en los precios internacionales de los productos agrícolas de exportación, el aumento en el precio del petróleo y la aceleración de la inflación mundial. En tales circunstancias y ante su incapacidad para gravar debidamente a los grupos de mayores ingresos y para controlar la evasión fiscal, el Estado costarricense optó por endeudarse para enfrentar sus problemas financieros. Con el crecimiento de la deuda pública externa y el ascenso en las tasas de interés internacionales, el colón —la moneda costarricense— empezó a devaluarse con respecto al dólar.⁷

Si bien los partidos políticos opuestos al PLN lograron ganar la presidencia en 1958 y 1966, no consiguieron el control de la Asamblea Legislativa, lo que limitó significativamente su margen de maniobra y, en particular, sus intentos por revertir algunos de los cambios experimentados por Costa Rica en esas décadas. Aunque algunos de tales partidos afirmaban que su ideología se basaba en la doctrina social de la Iglesia, los dos factores fundamentales que los distinguían eran el antiliberalismo y el respaldo de los sectores empresariales más conservadores del país. En ambos aspectos coincidía el más influyente periódico costarricense en esa época, el diario *La Nación*.⁸ A su vez, el Partido Comunista (denominado Vanguardia Popular), al que la Constitución de 1949 impedía competir electoralmente, tendió a sumarse a la oposición al PLN, aunque tal alineación empezó a cambiar a finales de la década de 1960.⁹

⁶ Ana Sojo, *Estado empresario y lucha política en Costa Rica*, San José, Editorial Universitaria Centroamericana, 1984, pp. 187-241; Mesa-Lago, *Buscando un modelo económico* [n. 4], pp. 424-453.

⁷ Víctor Bulmer-Thomas, *La economía política de Centroamérica desde 1920*, San José, Banco Centroamericano de Integración Económica, 1989, pp. 275-288; Jorge Rovira Mas, *Costa Rica en los años '80*, San José, Porvenir, 1987, pp. 52-56.

⁸ Rovira Mas, *Estado y política económica* [n. 3], pp. 119-176.

⁹ Iván Molina, *Los pasados de la memoria: el origen de la reforma social en Costa Rica (1938-1943)*, Heredia, Editorial Universidad Nacional, 2008, pp. 56-62.

La modificación en la estrategia de los comunistas se debió en parte al contexto internacional caracterizado por la revolución cultural de la década de 1960 y la radicalización de los estudiantes, jóvenes profesores y alumnos universitarios costarricenses pertenecientes al PLN que empezaron a identificarse con perspectivas de izquierda, como lo mostró el célebre Manifiesto de Patio de Agua (1968) que propugnaba por radicalizar algunas de las políticas liberacionistas. Además, entre los mismos comunistas comenzó a darse un proceso de diferenciación que condujo a la formación de nuevos partidos izquierdistas. En tal diversificación desempeñó una función fundamental la movilización estudiantil contra un contrato firmado por el gobierno de José Joaquín Trejos (1966-1970) y la transnacional Aluminum Company of America (ALCOA), que culminó en un grave enfrentamiento con la policía el 24 de abril de 1970.¹⁰

Desde su fundación en 1952, el PLN, que obtuvo la victoria en los comicios presidenciales de 1953, 1962 y 1970, no había logrado ganar dos elecciones consecutivamente. Por tal razón, en las filas de la oposición la campaña electoral con vistas a los comicios de febrero de 1974 estuvo caracterizada por diversos intentos para unificar a los grupos antiliberationistas. Al final esto no se logró porque en tales votaciones participaron ocho partidos políticos, lo que facilitó el triunfo de Daniel Oduber, candidato del PLN que capturó 43.4% de los sufragios. Los siete partidos perdedores incluían dos agrupaciones socialistas, dos identificadas con Democracia Cristiana, dos que representaban los intereses de diversos sectores empresariales y uno sin afiliación ideológica definida.¹¹ Fue en este contexto que se conoció la noticia del derrocamiento de Allende.

2. “No aplaudimos el golpe”

EN esta sección serán considerados los editoriales de siete de los más importantes periódicos que se publicaban en Costa Rica en

¹⁰ Roberto Salom, *La crisis de la izquierda en Costa Rica*, San José, Porvenir, 1987, pp. 54-61, 77-82 y 107-114; Clotilde Obregón, *El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica*, San José, Universidad de Costa Rica, 2000, p. 379; Paulino González, “Las luchas estudiantiles en Centroamérica: 1970-1983”, en Daniel Camacho y Rafael Menjivar, eds., *Movimientos populares en Centroamérica*, San José, Editorial Universitaria Centroamericana, 1985, pp. 266-284.

¹¹ Eduardo Oconitrillo, *Cien años de política costarricense 1902-2002: de Ascensión Esquivel a Abel Pacheco*, San José, Universidad Estatal a Distancia, 2004, pp. 195-213.

septiembre de 1973. Tres eran diarios: *La Nación* que, como ya se indicó, se distinguía por su conservadurismo y su respaldo a las principales fuerzas opositoras al PLN; y *La República* y *La Hora*, políticamente identificados con el PLN,¹² aunque con diferencias importantes entre ambos, como se verá más adelante. Los cuatro medios restantes circulaban semanalmente: el *Eco Católico*, vocero de la jerarquía eclesiástica costarricense, por entonces predominantemente alineada con el PLN;¹³ el *Semanario Universidad*, producido por profesores y estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en su mayoría pertenecientes al ala izquierdista del PLN o a organizaciones de izquierda; y *Pueblo y Libertad*, órganos del Partido Socialista Costarricense y del Partido Comunista, respectivamente.

“La grave decisión del ejército chileno” fue como *La Nación* tituló su editorial del 12 de septiembre de 1973 y en la primera parte del texto destacó la trayectoria democrática de Chile desde la década de 1930 y la apoliticidad de las fuerzas armadas de ese país, a las que definió como las más profesionales de América Latina. Posteriormente, enfatizó que la división de los sectores no socialistas en la segunda mitad de la década de 1960 llevó al triunfo de Allende, cuya gestión, desde un inicio, estuvo afectada por las diferencias que existían entre los grupos que componían la Unidad Popular. En este contexto, la política de nacionalización de empresas condujo a una profunda crisis económica, agudizada por

la acción de grupos extremistas que, irrespetando las consignas del propio gobierno de Allende, procedían a incautarse de fondos y propiedades rurales, entrando en conflicto no sólo con sus propietarios, sino con los sectores oficiales, que ofrecían la realización de una reforma agraria pero ordenadamente llevada a la práctica por el Estado.¹⁴

De acuerdo con el editorial de *La Nación*, las situaciones precedentes condujeron a una creciente polarización del país como resultado del fortalecimiento de una oposición que negó toda cooperación al gobierno y de los conflictos entre los sectores más moderados que integraban la Unidad Popular y los más radicales “que querían

¹² Patricia Vega, “El mundo en una página: un análisis de la primera plana de tres periódicos costarricenses (1950-1970)”, *Anuario de Estudios Centroamericanos* (San José), núm. 16-17 (1990-1991), pp. 139-153; Antonio Checa Godoy, *Historia de la prensa en Iberoamérica*, Sevilla, Alfar, 1993, p. 464.

¹³ Andrés Opazo, *Costa Rica: la Iglesia católica y el orden social*, San José, Departamento Ecueménico de Investigaciones, 1987, pp. 36-43.

¹⁴ *La Nación* (San José), 12-IX-1973, p. 14.

implantar el socialismo a marchas forzadas”. Todos esos factores condujeron al derrocamiento de Allende, de quien se reconoció su honestidad, el sacrificio que hizo en aras de sus ideales y su “noble calidad humana”. Llegado a este punto, el periódico costarricense expresó:

No aplaudimos el golpe. Hemos abogado siempre por la tesis de que, de la misma manera como Allende alcanzó el poder, en las urnas, debió haberlo perdido con los votos. Sin embargo, muy graves e insistentes han de haber sido los padecimientos del pueblo chileno para que una armada tradicionalmente civilista tomara la grave determinación de prescindir de su mística institucional para lanzarse al derrocamiento de un presidente legítimamente electo.¹⁵

De esta manera, *La Nación* tomó una distancia decisiva con respecto al golpe, pero a la vez construyó su narrativa de la experiencia chilena con la intención clara de resaltar los atenuantes que justificaban la intervención de los militares. Esta doble estrategia era básica para darle sentido a la parte final del editorial: en lo inmediato, lo que procedía era que el ejército devolviera a Chile “el verdadero ejercicio de una democracia abierta, plural y en plena libertad, una vez pacificado el país”.¹⁶ Finalmente, el periódico insistió en que la caída de Allende demostraba el fracaso de la fórmula para

introducir el socialismo dentro de la legalidad, sin menoscabo de las libertades básicas y sin daño del bienestar popular. La fórmula falló en Chile, como ha fallado siempre el marxismo a menos que lo impongan los tanques y lo tutelen las bayonetas. La cruda ironía es que sean éstos los que ofrezcan a Chile ahora su única oportunidad de reivindicación.¹⁷

En contraste con el editorial de *La Nación*, el de *La República*, titulado “El desenlace del odio”, introdujo dos variaciones significativas. La primera consistió en destacar que el momento decisivo en el proceso que culminó en el golpe de Estado fue el gobierno de Eduardo Frei (1964-1970), cuya obra progresista fue tenazmente impugnada por los partidos opuestos a Democracia Cristiana. Rápidamente, el socavamiento referido condujo a la división de las fuerzas democráticas, lo que contribuyó al triunfo de la Unidad Popular “y con ello a la instauración de un régimen marxista en un

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

país tradicionalmente democrático”.¹⁸ Con el ascenso de Allende, a quien el periódico definió como “un cautivo en manos de sus propios compañeros de partido”, Chile siguió una trayectoria que lo llevó al borde de una guerra civil.¹⁹

La segunda diferencia se refiere a que *La República*, en vez de tomar distancia con respecto al derrocamiento de Allende, desarrolló una argumentación que evitaba calificar la intervención de los militares, cuestionaba la democracia misma y adoptaba una perspectiva abiertamente anticomunista:

El ejército chileno se planteó la situación de su país [...] como un caso de conciencia [...] no es hora de analizar o evaluar la acción del ejército chileno. El problema es de mayor hondura y alcance. No es el ejército chileno el que está en entredicho, sino la capacidad misma del sistema democrático para resolver los problemas de nuestros países, así como para evitar el avance y predominio de los partidos comunistas, cuyo triunfo o progreso sólo se da por la fuerza de las armas o por un deterioro progresivo de las fuerzas democráticas de una nación.²⁰

Varias semanas antes del golpe de Estado, el diario *La Hora* ya había adoptado una línea editorial en la que presentaba el proceso chileno como “una revolución que respeta la ley”, enfrentada con la oposición creciente de “una oligarquía cada vez más despierta y dispuesta a defender sus derechos hasta la muerte”.²¹ Derrocado Allende, dicho medio lanzó su editorial del 12 de septiembre de 1973 contra las fuerzas armadas, cuya profesionalización fue analizada en un sentido muy distinto de cómo la consideraron *La Nación* y *La República*:

En Chile, los militares no han dado un golpe de estado. Los militares no son una clase social distinta. El militar está al servicio de un sistema y de quienes se aprovechan del mismo. En Chile, los militares son instrumento importante y necesario de la oligarquía. Y es ésta la que ha dado el golpe y la que no puede permitir el desarrollo pacífico de un proceso de justicia social [...] El pueblo debe aprender muy bien la lección [...] Nunca entregará el poder pacíficamente el sector minoritario que ha venido disfrutando de él durante muchos años.²²

¹⁸ *La República* (San José), 12-ix-1973, p. 8.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *La Hora* (San José), 12-ix-1973, p. 4

²² *Ibid.*

De modo similar al editorial de *La Nación*, el del *Eco Católico*, denominado “Allende” y publicado el 23 de septiembre, destacó varias cualidades del derrocado presidente chileno: su idealismo, su convicción de que podía manejar a los izquierdistas radicales y su nacionalismo y amor patrio. De particular interés fue el señalamiento que hizo dicho semanario al afirmar que algunos de los cambios ocurridos en Chile, como la nacionalización bancaria y de ciertos sectores de la industria, así como la reforma agraria, eran irreversibles. Además, el periódico resaltó que tales conquistas serían respaldadas por Democracia Cristiana y expresó que, de todos los errores cometidos, uno de los más graves fue pactar con los “izquierdistas radicales del marxismo-leninismo de Stalin”, quienes “no entienden de orden ni de juridicidad”.²³

Ciertamente *Eco Católico* no se refirió a los militares chilenos; pero, contrariamente a *La República*, sí se esforzó por diferenciar a las fuerzas de izquierda. Además, adoptó una posición de clara defensa de la democracia al indicar que para América Latina, “un continente que no ha roto todavía sus cadenas”, había al parecer sólo dos caminos políticos:

La violencia comunista es un camino. Camino engañoso de perspectivas de esperanza y realidades grotescas: una infame forma de esclavitud e imperialismo. Hay otro camino, el de la democracia enriquecida por la justicia social, en donde el hombre sea libre y solidario. El mundo marcha en forma irreversible hacia la social democracia, entendida como la participación del pueblo en los cuadros del poder político, bajo el signo cristiano de la solidaridad humana, libre de todo imperialismo, ya sea de derecha o de izquierda. Una democracia en donde los bienes de la tierra sirvan para satisfacer las necesidades vitales de los ciudadanos.²⁴

El enfoque adoptado por el *Semanario Universidad* con respecto al golpe de Estado, en un editorial del 17 de septiembre denominado “Las polainas y los fusiles destrozan proceso chileno”, se dirigió claramente contra los militares que, en la perspectiva del periódico, eran “idiotas en todas partes”. Sin embargo, el órgano universitario, que definió a Allende como “uno de los líderes más nobles y visionarios”, centró su atención en destacar la excepcionalidad de la experiencia de Chile, país en el que por vez primera “un líder marxista llegaba al poder por la vía del sufragio y eso, opuesto a

²³ *Eco Católico* (San José, 23 de septiembre de 1973), p. 2.

²⁴ *Ibid.*

la estrategia leninista y a los mismos principios del ‘Manifiesto’, constituía un suceso de honda repercusión”. Desde el punto de vista de este medio de comunicación, el gobierno de la Unidad Popular no sólo enfrentó la oposición de “las fuerzas conservatistas”, sino la discordia promovida por “los movimientos supra izquierdistas que no albergaban paciencia para que el cambio se realizara sin sobresaltos y dentro de los marcos democráticos en que siempre quiso mantenerlo Allende”.²⁵

Mucho menos sofisticada fue la perspectiva adoptada el 15 de septiembre por el semanario socialista *Pueblo*, en un editorial titulado “Chile: plata contra el pueblo”. De acuerdo con este periódico, el golpe fue resultado de que los ricos “se vieron perjudicados con las medidas que estaba tomando el gobierno”, en particular las nacionalizaciones, por lo que, en vista de que sabían que no ganarían los próximos comicios, lograron que el ejército se volviera en contra del proceso liderado por Allende. A diferencia de los editoriales precedentes, en el de *Pueblo* se mencionó por vez primera a Estados Unidos, aunque de manera marginal, y se comparó el caso chileno con el de Costa Rica:

en Chile lo que está sucediendo es que todos los ricos se han unido porque ven sus privilegios en peligro. Es lo mismo que sucede aquí en forma menos visible. Aquí la mayoría tiene que trabajar a cambio de un jornal o un salario. Las ganancias de las fincas y las fábricas se las llevan los dueños.²⁶

Sin duda la ruptura principal con las narrativas precedentes provino del semanario comunista *Libertad*, que afirmó en un editorial publicado también el 15 de septiembre que Allende había sido “derrocado por un complot organizado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en contubernio con la oligarquía y los jefes militares chilenos”.²⁷ Para este periódico, que denunció a los “partidos burgueses” y en particular a Democracia Cristiana por alzarse contra la Constitución, la responsabilidad principal del golpe de Estado le correspondía al imperialismo estadounidense “que encuentra en los círculos militares de alto rango y en las

²⁵ *Semanario Universidad* (San José, 10 de septiembre de 1973), p. 4. La fecha del periódico es errónea pues la edición corresponde al 17 de septiembre.

²⁶ *Pueblo* (San José, 15 de septiembre de 1973), p. 11. Conviene indicar que *Pueblo*, en esta misma edición, publicó campos pagados y declaraciones de otras organizaciones de izquierda en las que sí se enfatizó la función desempeñada por Estados Unidos en el derrocamiento de Allende.

²⁷ *Libertad* (San José, 15 de septiembre de 1973), p. 3.

clases sociales privilegiadas, sus socios menores, traidores a sus patrias, listos siempre a servir de instrumentos incondicionales a los planes de sus amos”²⁸.

En un balance de conjunto pueden destacarse varios aspectos referidos a los editoriales analizados y cómo el contexto político de la Costa Rica de ese momento influyó en su elaboración. *La Nación* destacó que las nacionalizaciones y la alianza con extremistas de izquierda fueron la base de la polarización que experimentó Chile, énfasis claramente dirigido contra las políticas del PLN de fortalecer la intervención estatal en la economía y la tendencia por parte de algunos de sus dirigentes de acercarse a grupos de izquierda. *La República* se apartó de esta línea de interpretación al acentuar que el origen de la crisis chilena estuvo en la tenaz oposición que enfrentó un gobierno socialmente progresista (el de Frei), con lo que formulaba una crítica implícita a los partidos políticos costarricenses no izquierdistas que se oponían a las transformaciones económicas y sociales impulsadas por el PLN. Ahora bien, es claro que en *La República* también había preocupación por el acercamiento entre dirigentes del PLN y sectores de izquierda.

Aunque *Eco Católico* compartía las inquietudes planteadas en el editorial de *La República*, el semanario eclesiástico procuró ir más allá de un enfoque anticomunista y, con base en la experiencia chilena, resaltó la opción que suponía la socialdemocracia (es decir, el PLN) para alcanzar el desarrollo social. En los casos de *La Hora*, *Semanario Universidad y Pueblo*, la influencia del contexto político costarricense fue menor, si bien el periódico universitario también destacó el riesgo que suponía la alianza con sectores radicales de izquierda. Tanto *Pueblo* como *Libertad* dejaron de lado el asunto de los conflictos internos de la Unidad Popular, un tema cuya importancia fue demostrada en investigaciones posteriores.²⁹ A su vez, *Libertad* se limitó a reproducir la versión del comunismo internacional sobre el golpe que acentuaba la función de los actores externos frente a los internos, estos últimos presentados como herramientas de los primeros, una perspectiva que no corresponde con la evidencia actualmente disponible.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Alan Angell, “Chile since 1958”, en Leslie Bethell, *Chile since Independence*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 157-177; Katherine Hite, *When the romance ended: leaders of the Chilean left, 1968-1998*, Nueva York, Columbia University Press, 2013, pp. 28 y 30-40.

³⁰ David F. Schmitz, *The United States and right-wing dictatorships, 1965-1989*, Nueva York, Cambridge University Press, 2006, pp. 101-103; John R. Bawden, “Cutting

3. “Civilistas y democráticas tradiciones”

LUEGO del golpe de Estado ocurrido en Uruguay el 27 de junio de 1973, Figueres manifestó su preocupación por la crisis de los regímenes democráticos en el continente, al expresar que “nos estamos quedando solos en América”.³¹ El 11 de septiembre de ese mismo año, al conocer la noticia de lo sucedido en Chile, el presidente costarricense declaró:

Salvador Allende fue un noble idealista y murió como un hombre [...] al saber la noticia de su derrocamiento yo me apresuré a ofrecerle la hospitalidad de Costa Rica y de mi propia casa. Creo que murió sin recibir esa pequeña satisfacción [...] quienes más debilitaron su régimen fueron sus propios beneficiarios con demandas inoportunas, huelgas y motines [...] no es posible realizar una reforma violenta, con todos los aciertos y errores que conlleva, sin suprimir el régimen de derecho y sin tener el respaldo de una potencia militar.³²

Así, desde el propio día del golpe de Estado, Figueres elaboró una narrativa que, a la vez que exaltaba a Allende en lo personal, acentuaba los conflictos entre los sectores que lo apoyaban. Este doble énfasis fue recuperado y ampliado por los editoriales de *La Nación*, *La República*, *Eco Católico* y *Semanario Universidad*. Figueres desarrolló la perspectiva referida en nuevas declaraciones publicadas el 15 de septiembre, en las cuales, después de contraponer el camino de la revolución comunista con el de la “reforma socialdemocrática”, manifestó que “la diferencia del gobierno de Allende con el suyo era en cuanto a los medios, no en cuanto a los fines”.³³ Finalmente, Figueres advirtió que, a diferencia de muchos intelectuales, estudiantes y organizaciones laborales de América Latina, él no era pesimista con respecto al futuro chileno. Por tal razón, descartó que el régimen militar fuera a dar origen a una dictadura y agregó que, “en honor a la verdad el ejército de Chile ha sido ejemplar, y en honor a la historia, es muy difícil dar pasos importantes hacia atrás hoy en día, menos en [el] orden social [...] Lo de Chile es irreversible”.³⁴ Estos puntos de vista influyeron de

off the dictator: the United States arms embargo of the Pinochet regime, 1974-1988”, *Journal of Latin American Studies* (Londres), vol. 45, núm. 3 (agosto de 2013), pp. 522-523.

³¹ *La República* (San José), 12-ix-1973, p. 8.

³² *La Nación* (San José), 12-ix-1973, p. 6.

³³ *La República* (San José), 17-ix-1973, pp. 46-47.

³⁴ *Ibid.*, p. 47.

modo decisivo en el editorial de *Eco Católico*, ya analizado, del 23 de septiembre.

También debe destacarse que, en el contexto inmediato en que fue conocida la noticia del derrocamiento de Allende, otras figuras políticas condenaron tácitamente el proceder de los militares chilenos. Tal fue el caso de Gonzalo Solórzano, ministro de la Presidencia, quien el 11 de septiembre de 1973 manifestó: “pareciera que el sistema democrático está de capa caída [...] duele mucho su situación [la de Chile]. Este país ha sido respetuoso en el pasado con el sistema democrático representativo. Es lamentable el golpe de Estado, sobre todo si existían las medidas democráticas de elección popular”.³⁵ El repudio fue más explícito en la Asamblea Legislativa, donde también el 11 de septiembre diputados de diversos partidos políticos, liderados por Manuel Mora —principal dirigente comunista del país—, aprobaron una moción contra el golpe de Estado.

Manuel Mora había ganado un escaño legislativo en 1970 como candidato del Partido Socialista Costarricense, dado que el Partido Comunista, al que él pertenecía, no podía competir en las elecciones (impedimento que fue derogado en junio 1975).³⁶ En la sesión del 11 de septiembre de 1973, pese a la oposición de algunos diputados, el pronunciamiento contra el golpe de Estado fue votado favorablemente. En buena medida dicho resultado fue favorecido porque Mora aprovechó la circunstancia de que estaba próxima la celebración de la fiesta nacional de independencia (15 de septiembre) para invocar el pasado de Costa Rica y hacer un llamado a defender sus experiencias democráticas y civilistas:

Yo no entro a considerar la ideología de lucha en este momento en Chile, aunque nadie ignora de qué lado están mis simpatías. Pero sí quiero referirme a la prepotencia de los ejércitos encaminada a imponer su voluntad. Muy grave [...] me parecería a mí que el Parlamento de Costa Rica dejara pasar sin protesta un golpe militar. En este momento tan delicado de la vida nacional no podemos saber qué consecuencias puede tener el precedente que se ha sentado en Chile. Los costarricenses debemos hacer todos los esfuerzos para que los gobiernos del país sean el resultado de la voluntad electoral. Pienso que la moción dice bien cuando afirma que son los pueblos los llamados a elegir y cambiar gobiernos y de ahí el pronunciamiento contra el golpe militar, sin que signifique un pronunciamiento a favor de

³⁵ *La Nación* (San José), 12-IX-1973, p. 8.

³⁶ Obregón, *El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica* [n. 10], p. 393.

ninguna de las corrientes ideológicas en pugna. Es una forma de ayudar a defender nuestro propio régimen democrático. Las botas de los militares hacen cada vez más ruido en el continente, y yo levanto mi protesta por lo sucedido en Chile.³⁷

Casi de manera simultánea, la Federación de Estudiantes Universitarios de Costa Rica (FEUCR) aprobó el 11 de septiembre una declaración contra el golpe de Estado, el cual fue calificado de fascista y atribuido al Pentágono. Además, tal organización señaló que lo ocurrido en Chile evidenciaba cuál era “el concepto que tienen los gorilas proimperialistas de lo que ellos llaman ‘democracia’, ésta es la democracia de los ricos, de los terratenientes y de los grandes monopolios”. Después de aludir a la teoría de la dependencia y de recordar las intervenciones de Estados Unidos en Guatemala (1954) y en República Dominicana (1965), la FEUCR insistió en que los pueblos eran “víctimas de los militares, los mismos que asesinan estudiantes y obreros, los mismos que han bombardeado Indochina y también los mismos que amenazan con un golpe de Estado en nuestro país”.³⁸

Todo indica que el antimilitarismo que prevaleció en la moción aprobada por los diputados y en la declaración de la FEUCR influyó, de manera significativa, en los editoriales de *La Hora* (12 de septiembre) y del *Semanario Universidad* (17 de septiembre), así como en un artículo publicado una semana después en este último periódico por Fernando Volio. Abogado, especialista en el tema de los derechos humanos y prominentemente anticomunista, Volio —quien fuera diputado por el PLN en los periodos 1958-1962 y 1966-1970 y vicedirector de Cultura en el bienio 1970-1971— expresó:

A todos los hombres nos interesaba el experimento chileno, que ponía a prueba los recursos de la democracia electiva. Pero en nombre de ella la desvirtuaron sus falsos profetas con la ayuda del brazo largo de los Carabineros, para decirnos ahora, como lo proclamó el presidente de la Democracia Cristiana, señor Patricio Aylwin, que Allende había hecho fracasar el socialismo chileno. Que los generales racionalicen su artero golpe y traten de legitimarlo con posturas democráticas, no debe extrañar. Pero que el partido político mayoritario participe en la farsa, lo llena a uno de estupor.³⁹

³⁷ *La Nación* (San José), 12-IX-1973, p. 18.

³⁸ *Ibid.*, p. 6.

³⁹ *Semanario Universidad* (San José, 24 de septiembre de 1973), p. 24. Volio fue el único relator especial de las Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, autorizado

En el mundo intelectual y académico, los dos principales pronunciamientos contra el golpe de Estado fueron dados a conocer por la Asociación de Autores y por las autoridades de la Universidad de Costa Rica. La primera de tales instancias, en un campo pagado fechado el 13 de septiembre y publicado el día 18, condenó el derrocamiento de Allende y manifestó “su más enérgica oposición pública a toda intromisión militar que bajo cualquier pretexto y por las fuerzas de las armas, inutilice la voluntad del pueblo, el cual es el único moralmente autorizado para escoger a sus propios gobernantes”. Además, la Asociación hizo

un vehemente llamado al pueblo costarricense, uno de los últimos reductos de la paz, la democracia y la libertad en nuestro continente, para que celosamente resguarde sus civilistas y democráticas tradiciones, ante el clima de violencia y la imposición militar que sufre la América Latina.⁴⁰

Por su parte, las autoridades universitarias, en un documento que circuló en el periódico *La Nación* del 19 de septiembre de 1973, expresaron que consideraban “el derrocamiento y la muerte del doctor Salvador Allende un acto de brutalidad política que debe condenarse en forma enérgica”. Asimismo, manifestaron que la ruptura del orden constitucional en Chile tendría “muy graves repercusiones en la vida democrática de la América Latina”, al crear desalientos y frustraciones de “impredecibles consecuencias”; e indicaron que,

como educadores costarricenses, y como hombres y mujeres de ideas democráticas que aspiran a vivir en un continente económicamente desarrollado y socialmente justo, expresamos nuestra condena enérgica al golpe militar de Chile y nuestra esperanza de que, finalmente, los pueblos de la América Latina puedan disponer de su destino según el mandato de las mayorías.⁴¹

En su conjunto, los políticos e intelectuales respondieron al derrocamiento de Allende con declaraciones que, en su dimensión más moderada, exaltaban al presidente chileno y afirmaban la perdurabilidad de las transformaciones emprendidas por su gobierno; y en la más radical, condenaban el golpe y la intervención de los mili-

para visitar Chile a partir de 1986, véase Elizabeth Lira y Brian Loveman, *Políticas de reparación: Chile 1990-2004*, Santiago de Chile, LOM, 2005, p. 49.

⁴⁰ *La Nación* (San José), 18-IX-1973, p. 30.

⁴¹ *La Nación* (San José), 19-IX-1973, p. 8.

tares. El predominio de esta última tendencia puede explicarse, en parte, por la toma de conciencia del retroceso que experimentaban los regímenes democráticos en América Latina en ese momento, fenómeno que en un futuro cercano sería reforzado por la instauración de una dictadura militar en Argentina; y en parte porque después de la guerra civil de 1948, la democracia y el gobierno civil se consolidaron como fundamentos no sólo del sistema político sino también de la identidad nacional costarricense.⁴²

4. “Costa Rica se convertirá en una segunda Chile”

DE acuerdo con lo publicado por *La Nación*, el 11 de septiembre de 1973 se realizaron varias manifestaciones en San José (capital de Costa Rica) a favor y en contra de lo ocurrido en Chile. Una de esas marchas, que partió de la Universidad de Costa Rica y culminó en el centro de la ciudad, estaba compuesta por varios cientos de estudiantes que expresaban su simpatía por el gobierno derrocado. Otro grupo, en el que iban centenares de personas, desfiló hasta la embajada chilena portando banderas rojas y pancartas “con letreros como ‘Allende, el pueblo te defiende’, y ‘Chile sí, fascistas no’. Algunos gritaban consignas de ‘pueblo al poder’ y ‘obrero viril, engrasa tu fusil’”.⁴³ Finalmente, al grito de “Chile sí, comunismo no”, los integrantes de otra movilización más pequeña evidenciaron “su júbilo por el golpe de Estado”.⁴⁴

Aunque *La Nación* no identificó a quienes simpatizaban con el derrocamiento de Allende, es probable que se tratara de miembros de la principal organización de extrema derecha que existía por entonces en el país: el Movimiento Costa Rica Libre (MCRL). Fundado en 1961, en el contexto de la Revolución Cubana, el MCRL, de orientación paramilitar, combinaba estrechamente nacionalismo y anticomunismo.⁴⁵ Por tanto, no sorprende que, en el espacio semanal que publicaba en *La Nación*, el MCRL expresara el 17 de septiembre:

⁴² Iván Molina, *Costarricense por dicha: identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante los siglos XIX y XX*, San José, Universidad de Costa Rica, 2002, pp. 75-76.

⁴³ *La Nación* (San José), 12-IX-1973, p. 6.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Mercedes Muñoz, “El discurso del anticomunismo: un recurso de seguridad nacional: el caso de Costa Rica 1959-1962”, ponencia presentada en el VI Congreso Centroamericano de Historia, Panamá, 2002, pp. 15 y 18-20.

El derrocamiento del régimen marxista chileno nos ha alegrado profundamente. Nos satisface de pleno ver como todo un pueblo ha sido rescatado de las garras del imperialismo comunista [...] Chile en fin ya no será otra Cuba [...] El gobierno marxista de Allende había sumido a Chile en el “caos organizado” [...] Pero el ejército chileno se les adelantó. Conscientes de su deber para con su pueblo [las fuerzas armadas] evitaron con su valiente determinación que Chile fuera otro satélite del imperialismo soviético [...] Confiamos en que nuestros compatriotas aprendan la lección en cabeza ajena. El comunismo debe ser repudiado siempre, en todo momento y en todo lugar.⁴⁶

Dado que en el MCRL militaban personas pertenecientes a distintos partidos políticos, tal organización evitó darle una connotación electoral a su pronunciamiento sobre lo sucedido en Chile; pero éste no fue el caso de Jorge González Martén, candidato presidencial por el Partido Nacional Independiente, que consideró que los acontecimientos chilenos podían ser explotados electoralmente, en particular contra el PLN. Tal instrumentalización política del golpe de Estado fue facilitada porque la campaña de González Martén (quien había residido por largo tiempo en Estados Unidos y tenía la nacionalidad estadounidense) se basaba en dos ejes principales: el nacionalismo y el anticomunismo.⁴⁷

El 12 de septiembre González Martén, después de clasificar al gobierno de la Unidad Popular en la categoría de “régimenes oprobiosos” que ultrajaban “los principios cristianos de nuestros pueblos”, señaló:

el desenlace chileno y el derrocamiento de Allende, tras un largo período de incertidumbres y convulsiones internas, deben servir de lección oportuna al pueblo costarricense [...] Nuestro Partido Nacional Independiente en Costa Rica ha sido el único en esta contienda electoral que ha alertado a los costarricenses para evitar que suframos lo que en estos tres años sufrió Chile. Somos el único partido que categóricamente y con respuesta seria se ha enfrentado al planteamiento socialista, porque creemos en los derechos humanos y en los valores que han conformado nuestra nacionalidad y en que, sobre el principio de la libertad y del trabajo, podremos desarrollar nuestro país... Esperamos que el pueblo despierte y que se dé cuenta de que el nacionalismo lucha por mantener y respaldar nuestras libertades y por llevar al país a un nivel de desarrollo en beneficio de todos los costarricenses.⁴⁸

⁴⁶ *La Nación* (San José), 17-IX-1973, p. 28.

⁴⁷ Oconitrillo, *Cien años de política costarricense 1902-2002* [n. 11], pp. 199-201.

⁴⁸ *La Nación* (San José), 12-IX-1973, p. 2.

Dos días después, el 14 de septiembre, fueron dadas a conocer unas declaraciones en las que González Martén sostuvo que “si gana Daniel [Oduber] Costa Rica se convertirá en una segunda Chile. Estamos en los albores de serlo si no gana el Partido Nacional Independiente”.⁴⁹ Agregó además que Oduber estaba “mancomunado con los grupos comunistas”, por lo que “vamos hacia el caos de la izquierda o hacia la democracia con mi partido”.⁵⁰ La repuesta más contundente a los planteamientos de González Martén, sin embargo, no provino del PLN sino de Fernando Trejos Escalante, candidato presidencial de Unificación Nacional, el principal partido antiliberationista durante la campaña electoral de 1973-1974.

En un comunicado que fue publicado por *La Nación* el 21 de septiembre de 1973, Trejos Escalante propuso una nueva interpretación del proceso chileno, en la cual ya no se responsabilizaba únicamente a la izquierda radical por lo ocurrido y la intervención militar era conceptualizada como una mediación decisiva:

en Chile se impusieron la izquierda y la derecha radicales. Ambas querían una confrontación, armaron al pueblo y estuvieron al borde de la guerra civil. Esto fue una invitación para que uno de los ejércitos más civilistas del mundo interviniera en el proceso. En Chile, el ejército no sucumbió a los intentos de politización que venían de ambos extremos del abanico de ideas y tendencias [...] y terminó por dar un golpe de Estado [...] cuando la guerra civil amenazaba y cuando la solución política parlamentaria sucumbía.⁵¹

Si bien el enfoque precedente suponía justificar la intervención de las fuerzas armadas, la perspectiva planteada por Trejos Escalante tenía la ventaja de que le permitía presentarse al electorado como el candidato de un partido opuesto al PLN, pero —a diferencia de González Martén— no de extrema derecha. Por eso, en la sección final del comunicado referido, Trejos Escalante enfatizó que

la lección que los costarricense debemos derivar de Chile no es la de que, si gana equis partido [el PLN] y no el nuestro, aquí va a haber caos, guerra civil, más radicalización. Esto no es así; es pueril intentar una semejanza entre dos países tan distintos y dos situaciones tan encontradas. Lo único en común que puede haber entre las situaciones de Chile y de Costa Rica es que, aquí como allá, el juego democrático y la alternabilidad en el poder deben mantenerse [...] Asustar al pueblo con el espectro de la guerra civil

⁴⁹ *La República* (San José), 14-IX-1973, p. 9.

⁵⁰ *La Nación* (San José), 14-IX-1973, p. 8.

⁵¹ *Ibid.*

es tan irresponsable como decir que todos los candidatos a la Presidencia de la República, con excepción de uno, son incapaces, ignorantes y desprevenidos.⁵²

Por último, y con el fin de compensar la posición adoptada al inicio del comunicado que justificaba la intervención de los militares chilenos, Trejos Escalante recurrió a una arriesgada estrategia discursiva en la que, al presentar como una debilidad del sistema democrático costarricense la falta de fuerzas armadas profesionales, resaltaba por contraste que tal ausencia era precisamente uno de los fundamentos de la democracia que prevalecía en Costa Rica: “Chile, eso sí, era menos vulnerable que nosotros porque nosotros no tenemos ejército y nuestra única defensa desde el punto de vista democrático está en las urnas electorales. Acudiremos a ellas con fe en que ahí está la solución”.⁵³

Forzado a pronunciarse ante las declaraciones de González Martén, que era su principal rival en la competencia por ganar el apoyo de los votantes no liberacionistas, Trejos Escalante elaboró una respuesta ideológicamente centrista que, en la práctica, redujo al mínimo las posibilidades de explotar electoralmente los sucesos chilenos, sobre todo para quienes se ubicaban en la extrema derecha. Los resultados de los comicios de febrero de 1974 confirmaron que la estrategia de Trejos Escalante, basada en la moderación, fue más efectiva que la de González Martén, ya que el primero logró 30.4% de la votación total, mientras que el segundo apenas alcanzó 10.9%.⁵⁴

Un segundo proceso de instrumentalización de los acontecimientos chilenos con fines electorales tuvo por eje el Partido Demócrata Cristiano, pero dado que ésta era una organización minoritaria, la experiencia fue marginal. Los cuestionamientos a los demócratas cristianos chilenos, presentes en algunos de los editoriales y en los comentarios de Volio analizados anteriormente, pronto fueron trasladados a sus contrapartes costarricenses. El 14 de septiembre de 1973, el periódico *La Hora* publicó un artículo —firmado con un pseudónimo— en el que se reclamaba al “movimiento democristiano” de Costa Rica por no pronunciarse acerca de lo acaecido en Chile.⁵⁵ Curiosamente, ese mismo día, en *La Prensa Libre*, el

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Oconitrillo, *Cien años de política costarricense 1902-2002* [n. 11], p. 210.

⁵⁵ *La Hora* (San José), 14-IX-1973, p. 4.

partido referido publicó un comunicado en el que manifestó que defendía “decididamente el principio constitucional” y condenaba el “golpe de Estado como salida política para combatir un gobierno electo por la vía democrática”.⁵⁶

Conclusión

EN su conjunto, las repercusiones que tuvo en Costa Rica el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 evidenciaron una clara identificación de los principales medios de comunicación, autoridades, políticos e intelectuales con los procedimientos legales e institucionales de acceder al poder y de ejercerlo; con el carácter esencialmente civil de la política; y con la democracia como forma fundamental de gobierno. Con excepción del MCRL y de González Martén, la tendencia prevaleciente se orientó a condenar o a deplorar el derrocamiento de Allende y la intervención de los militares chilenos, a veces junto con la expectativa —que al final no se cumplió— de que, a corto plazo, un régimen democrático sería restablecido en Chile.

Indudablemente, el predominio de la tendencia referida fue favorecido por las tradiciones democráticas y civilistas de Costa Rica que se remontaban a las últimas dos décadas del siglo XIX; pero también tuvo una influencia decisiva el cambio experimentado por la política costarricense a finales del decenio de 1960. Por entonces, el anticomunismo asociado con la Guerra Fría, que prevaleció después de la guerra civil de 1948, empezó a ser desplazado por un nuevo balance de fuerzas de índole centroizquierdista. Fue en este contexto que el principal líder comunista del país logró que la Asamblea Legislativa aprobara una moción contra el golpe de Estado encabezado por los militares chilenos, y que la derecha moderada (Trejos Escalante) se distanciara de la explotación electoral del derrocamiento de Allende realizado por la extrema derecha (González Martén).

Dado ese predominio centroizquierdista, se comprende mejor el énfasis puesto por diversos medios de comunicación y por el propio presidente Figueres en responsabilizar a la izquierda radical por el fracaso del gobierno de la Unidad Popular. Tal interpretación ciertamente era un arma de varios filos, ya que podía ser utilizada por algunos de los líderes del PLN para insistir en que su estra-

⁵⁶ *La Prensa Libre* (San José), 14-IX-1973, p. 14.

tegia de cambio social no se basaba en la revolución, sino en la reforma socialdemócrata de las instituciones; por los sectores más conservadores del PLN para impugnar a sus compañeros de partido identificados con la izquierda; por las fuerzas antiliberacionistas para oponerse a las nuevas políticas públicas impulsadas por el PLN que profundizaban la intervención estatal en la economía; y por los sectores moderados de la izquierda para diferenciarse de los más radicales.

Desde antes de que Allende fuera depuesto ya Figueres se había valido de la metáfora de la soledad para destacar la excepcionalidad de Costa Rica en una América Latina cuyas democracias eran desplazadas por regímenes militares. El derrocamiento de Allende ciertamente reforzó ese discurso que invocaba el excepcionalismo costarricense, pero en un sentido que combinaba, de manera decisiva, nacionalismo, democracia, gobierno civil y reforma social. De esta manera, los acontecimientos chilenos, en vez de jugar a favor de los grupos que priorizaban la conexión entre identidad nacional y anticomunismo (en especial, el MCRL y el Partido Nacional Independiente de González Martén), fortalecieron la posición de los sectores de centro izquierda, como fue evidente durante la administración de Oduber (1974-1978).⁵⁷

⁵⁷ A ese fortalecimiento de los sectores de centro izquierda contribuyó, en el corto plazo, la llegada de exiliados chilenos (en particular, artistas e intelectuales) que se integraron a la sociedad costarricense. Para una primera aproximación a esta problemática, véase Marisol Gutiérrez, “Copihues entre orquídeas: mujeres chilenas exiliadas en Costa Rica (1973-2003)”, *Revista Estudios* (San José) núm. 20 (2007), pp. 171-185.

RESUMEN

El propósito principal de este artículo es analizar las repercusiones que tuvo en Costa Rica el golpe de Estado ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973. Para cumplir con tal objetivo, se considera la forma en que los medios de comunicación y los políticos e intelectuales respondieron a la noticia del derrocamiento de Salvador Allende. También se estudia el intento realizado por un partido político para explotar electoralmente los acontecimientos chilenos. Por último, se plantea que lo ocurrido en Chile reforzó un discurso costarricense que asociaba nacionalismo, democracia, gobierno civil y reforma social.

Palabras clave: historia Costa Rica siglo xx, Partido Liberación Nacional, gobierno de la Unidad Popular.

ABSTRACT

The main purpose of this paper is the analysis of the impact on Costa Rica of the coup d'État in Chile on September 11th, 1973. In order to attain this goal, the author reviews how the media, the politicians and the intellectuals responded to the news of Salvador Allende's overthrow. The attempts of a political party to take advantage at the polls of what happened in Chile are also revised. Finally, the author argues that the Chilean events strengthened a Costa Rican discourse embracing nationalism, democracy, civil government and social reform.

Key words: Costa Rica history 20th century, Party of National Liberation, Unidad Popular government.